



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, agosto 18 del 2022

Radicado: 05001- 31- 05-003-2016-00098-01
Demandante: INÉS AMPARO DUQUE RIVERA
Demandado: COLPENSIONES, PORVENIR SA Y PROTECCIÓN SA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: INEFICACIA DE TRASLADO ENTRE REGÍMENES

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

Atendiendo al contenido de la escritura pública 3374 de septiembre 2 de 2019 suscrita ante el Notario 9 de Bogotá, por la Cual la administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones otorga poder a la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERÍA S.A.S. para ejercer la defensa judicial de la entidad, se le reconoce personería adjetiva a la sociedad, quien a su turno sustituye el poder en la Dra. Johanna Andrea Muñoz Velásquez, quedando esta última investida de todas las facultades que confirió la entidad poderdante.

ANTECEDENTES

El proceso giró en torno a definir si le asiste derecho a la demandante a la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS y el consecuente regreso al RPM. En ese mismo sentido, a establecer las consecuencias jurídicas que resultarían de tal declaratoria.

En sentencia de primera instancia, el A quo manifestó que las AFP accionadas no probaron haber ilustrado a la actora de las consecuencias del traslado entre regímenes, causándole un grave perjuicio; por tanto para efectos de restablecer el daño generado, declaró la “ineficacia por inaplicación constitucional” de la pérdida de las condiciones pensionales del régimen de prima media.

En este sentido estableció que PROTECCIÓN deberá reconocer la pensión de vejez bajo el RPM a partir del 01/12/2020 con una mesada por valor \$1'564.730, a razón de 13 raciones anuales, además de un retroactivo pensional causado entre el 21/11/2016 y el 30/11/2020 por valor de \$76'969.819,36 con la debida indexación. Además, estableció el deber de solicitar a Colpensiones el cálculo pensional con miras a subrogación pensional. El que deberá ser realizado por Colpensiones dentro de los 2 meses siguientes, informándolo a Protección, quien en un plazo de 1 mes siguiente lo pagará. Mientras no se pague el cálculo actuarial subsistirá en Protección la obligación de pagar la mesada pensional.

Indicó que una vez Colpensiones reciba el cálculo actuarial pagará la mesada pensional bajo el RPM, sin que sea procedente la imposición de intereses de mora.

De igual forma estableció la responsabilidad de la AFP Porvenir en las condenas emitidas, permitiendo que Protección recobre a esta entidad el 10% de lo que pague, esto es del retroactivo pensional y del cálculo actuarial que se reconozca

a Colpensiones, a satisfacer dentro del mes siguiente del requerimiento que haga Protección. Por último, gravó en costas a la AFP Protección.

Inconforme con la decisión fue **recurrida así**:

La **AFP Porvenir SA** solicitó la revocatoria total de la decisión, exponiendo que el fallador de instancia se alejó del precedente construido por la jurisdicción ordinaria laboral en este asunto. Señaló que para el año 1997 el deber de información se limitaba a una asesoría, dando a conocer las características del régimen al que ingresaban, obligación que se cumplió por esta accionada de lo que da cuenta la suscripción del formulario de afiliación y los dichos del interrogatorio de parte, donde manifestó conocer que para efectos de causar la prestación debía completar un capital, además que se brindó una re-asesoría, donde la actora optó por permanecer en el RAIS.

Colpensiones reprochó los efectos y alcances de la decisión. Señaló que el traslado entre regímenes fue efectivo en tanto se le brindó una información suficiente, además de forma voluntaria migró a otra administradora del RAIS, lo que denota su voluntad de permanecer a este régimen.

Expuso que no es posible la condena al pago de una pensión de vejez que no es consecuente con la demanda, además de exponer que las condenas emitidas desconocen el precedente jurisprudencial en el asunto estudiado.

De forma subsidiaria, solicitó que de confirmarse la declaratoria de ineficacia debe disponerse la devolución total de todos los recursos captados en el RAIS de la actora, incluyendo los rendimientos y gastos de administración.

Por último, la **AFP Protección** expuso que esta entidad cumplió con el deber de información exigido en el año 2000, por lo que el traslado contó con la asesoría

suficiente, destacando que no fue esta administradora quien gestó la migración de Régimen, que lo fue la AFP Horizonte- ahora Porvenir. Destaca que a la actora se le presentó una proyección pensional, pero prefirió permanecer en el RAIS.

De forma subsidiaria, señaló que en evento de avalarse la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen deben seguirse la construcción jurisprudencial fijada sobre el asunto.

ALEGATOS

Concedido el término que establecía el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 se presentaron diferentes escritos así:

Protección SA disintió de las condenas emitidas en tanto considera que producto de la declaratoria de ineficacia no es procedente el reconocimiento pensional por parte de esta entidad, pero bajo las reglas del RPM, a la vez que la constitución de una reserva actuarial en favor de Colpensiones toda vez que ello desconoce las reglas propias de cada régimen y el precedente jurisprudencial que frente al mismo ha emitido la Corte Suprema de Justicia.

Mismo reparo que presentó la **AFP Porvenir** señalando que se excedieron los poderes ultra y extra petita y que la decisión desconoce las reglas jurisprudenciales sobre la materia.

A su turno **Colpensiones** reiteró los argumentos de apelación, donde insiste en la suficiencia de la información brindada, pero además expone que los efectos dados por el fallador de instancia escapan a las consecuencias de la declaratoria de ineficacia que fueron expuestas en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

De acuerdo a las pruebas aportadas al proceso, en el presente evento se encuentra por fuera de discusión que: **1) Inés Amparo Duque Rivera** nació el 21 de noviembre de 1956 (página 5 expediente escaneado). **2)** Que la actora realizó cotizaciones al RPM a través del extinto ISS desde el 20 de junio de 1980 (historia laboral páginas 54/55 expediente escaneado), migrando al RAIS a través de la AFP Horizontes (ahora Porvenir) la que se hizo efectiva a partir del 1° de julio de 1997 (página 145 expediente escaneado), realizando un posterior cambio a la AFP Protección con la suscripción del formulario el 22 de mayo de 2000 efectiva a partir del ciclo de julio del mismo año (página 93 expediente escaneado) entidad a la que permanece afiliada hasta el momento de presentación de la acción judicial.

Atendiendo a los aspectos objeto de apelación y estudiando el expediente en el grado de consulta en favor de Colpensiones, se advierte que el eje central de la controversia en esta instancia gira en torno de establecer si el traslado entre regímenes fue eficaz, así como las consecuencias jurídicas que resultan de tal situación.

Pues bien, en cuanto a la declaratoria de ineficacia pretendida, ha de indicarse que, dentro del sistema general de pensiones coexisten los regímenes de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual, sistemas que aunque cubren las mismas contingencias, prevén distintos requisitos y métodos para acceder a las prestaciones, siendo la inscripción a uno u otro régimen un acto libre y voluntario que corresponde a cada afiliado; libertad que no podrá ser limitada por ninguna persona, so pena de imponerse sanciones pecuniarias, además de entender que “...**la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador**”(artículo 271 Ley 100 de 1993 y artículo 13 ley 100 de 1993).

Para la Sala es relevante el análisis de la expresión de voluntad de la actora al trasladarse entre regímenes, con especial énfasis en las actuaciones desplegadas por la administradora de pensiones que ofrece el traslado ya que le corresponde brindar una asesoría suficiente, explicando los riesgos y beneficios del mismo, ello para que la decisión esté debidamente informada, sea autónoma y consciente. Criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia entre otras en sentencia del 3 de septiembre de 2014, radicado 46.292.

Se destaca que de cara a los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, cuando la elección del régimen pensional no es producto de una decisión libre, se genera la ineficacia o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado (al respecto la sentencia CSJ SL 1689 de 2019)

Es así que, cuando la asesoría es nula, pobre o errada respecto a las consecuencias del traslado, se entiende que la decisión de trasladarse no fue un acto libre, ni voluntario, no estuvo precedida de la comprensión necesaria y por tanto no es eficaz.

Al respecto la Sala de Casación Laboral de la C.S.J refirió algunas situaciones que generan ineficacia a la afiliación, relativa a la insuficiencia de la información brindada, así indicó en sentencia SL 2611 de 2020:

De manera que, conforme lo discurrido queda claro que existe ineficacia de la afiliación cuando quiera que i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

Se destaca el compromiso que debe asumir las AFP que ofrecen el traslado de régimen pensional, en tanto están ubicadas en el campo de la responsabilidad profesional y les compete prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, debiendo informar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisiones, de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba a la hora de verificar la eficacia en los traslados de régimen.

Cabe señalar que en sentencia SL 4360 de 2019, la Corte Suprema de Justicia enfatizó que, la firma del formulario de afiliación que incluye la reseña relativa a la aceptación de las consecuencias del traslado, no supe el deber de información, ni resulta suficiente para darlo por demostrado, así indicó la Corte:

“Por otro lado, no es plausible asumir que la firma del formulario de afiliación implica la aceptación de que el afiliado recibió información oportuna y suficiente sobre las consecuencias del cambio de régimen. El derecho del trabajo y de la seguridad social se construye sobre realidades y verdades; por consiguiente, es inaceptable que bajo el escudo de un formalismo las administradoras se excusen del cumplimiento de sus deberes y responsabilidades legales”

Precisó la alta corporación que las consecuencias de una omisión o falencias en el deber de información producen ineficacia del acto, que lleva al funcionario judicial a declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás, volviendo la situación al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación, esto es con efectos ex tunc (desde siempre).

Y bajo esta premisa, la Sala de Casación Laboral de la C.S.J ha indicado que por efectos de la declaratoria de ineficacia los fondos privados de pensiones que perpetuaron la afiliación al RAIS deben retornar la totalidad del capital ahorrado, los rendimientos financieros, los gastos de administración, comisiones, sumas depositadas en las cuentas de garantía de pensión mínima, con la respectiva indexación todos estos con cargo a sus propias utilidades, ya que al ser captados

producto de un acto ineficaz, estos recursos debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida, tal como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la CSJ en sentencias SL 4360 de 2019 y SL 2877 de 2020, de esta última se destaca algunos apartes:

“...la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional”.

Devolución que incluye los réditos o frutos producidos por los recursos depositados por los afiliados, por cuanto la declaratoria de ineficacia implica la restitución de todos los recursos, incluyendo estos últimos, bajo el entendido que las partes son responsables de las pérdidas de la especie, sus frutos, entre otros, así indicó la Corte desde la sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad. 31989, rememorada en sentencia SL 4811 de 2020 así:

“Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad. 31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrinó:

[...]

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

En adición debe garantizarse que la devolución guarde la misma capacidad económica que lo sería de haber ingresado periódicamente al fondo común, por tanto, los conceptos a trasladar tales como gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima se retornarán con la debida indexación con

cargo a los recursos propios de la entidad., así se indicó en sentencia SL 950 de 2022:

También se ha dicho por la Sala que como la declaratoria de ineficacia tiene efectos ex tunc (desde siempre), las cosas deben retrotraerse a su estado anterior, como si el acto de afiliación jamás hubiera existido. Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Criterio que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.

En consecuencia, al resolver la consulta a favor de COLPENSIONES habrá de adicionarse el numeral primero del fallo del a quo, en el sentido de que PROTECCIÓN S.A. deberá trasladar a Colpensiones los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual del demandante junto con sus rendimientos. De igual modo, la citada AFP deberá devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Declaratoria de ineficacia de traslado entre regímenes y la consecuente devolución de dineros captados que no se halla sujeta al término prescriptivo dado el carácter irrenunciable de los derechos pensionales y todos los factores que lo componen, como es el caso de la permanencia a un régimen pensional, el que determinará la forma como se accede a la prestación, así lo indicó la Sala de Casación Laboral de la CSJ en sentencia SL 1689 de 2019:

“Entonces, desde un enfoque material y en respeto de los parámetros aludidos ya adoptados por la Sala frente a los asuntos pensionales, es lógico concluir que la ineficacia de traslado de régimen pensional, también goza del carácter de imprescriptible, en la medida que su declaratoria, le permitirá al peticionario obtener la satisfacción de un

derecho que comparte esa misma condición y cuya protección real y efectiva, conlleva el cumplimiento de los objetivos que legal y constitucionalmente caracterizan a un Estado social de derecho”.

Así las cosas, **descendiendo al caso analizado**, se tiene que las AFP accionadas no allegaron los correspondientes argumentos probatorios que demuestre la suficiencia de la asesoría brindada, limitándose a exponer que quien acciona realizó de forma voluntaria la migración de régimen, brindando la información que le era exigible de la que no debía quedar constancia, más allá de la firma del formulario de afiliación.

Por su parte, la actora dentro de interrogatorio de parte expresó que la migración entre régimen se realizó producto de una asesoría de la AFP Horizonte en su lugar de trabajo, a través de una breve reunión grupal, donde se le expuso que al trasladarse de régimen tendría una prestación con menos trámites, que sus familiares podrían heredar la pensión y que conforme al aporte se aumentaría la prestación. Señaló que luego de la migración no recibió asesoría posterior, nunca tuvo una llamada telefónica, visita o recomendación de permanecer o regresar a RPM.

Como tampoco se brindó una asesoría por Protección SA, ya que migró a esta entidad producto de una reunión grupal, de media hora, no recibió una proyección de las condiciones particulares para su pensión, tampoco recibió llamada telefónica, pues solo era remitido a su correo los extractos, manifestando desconocer las pruebas que refieren a la reasesoría y proyección pensional que Protección haber realizado (tiempo de la audiencia minuto 10 en adelante)

Es así que las explicaciones dadas por las AFP accionadas además de escasas, develan una información engañosa a la actora, al prometersele condiciones pensionales que si bien son propias de este sistema, no se le clarificaron las condiciones que debía reunir para conformar la prestación.

Falta al deber de información que no se convalida en ningún momento con la suscripción del formulario de afiliación, pues como se indicó, la simple firma o autorización en una pre- forma que contienen una leyenda referente al consentimiento, no supe el deber material de efectivamente instruir al usuario de forma tal que se genere un panorama real de las condiciones pensionales que abandona y los requisitos que debe satisfacer para beneficiarse de las ventajas y virtudes del régimen al que ingresa (CSJ SL 1948 de 2021)

Como tampoco se presenta una anuencia o convalidación de traslado por la permanencia en el RAIS, la movilidad entre administradoras de pensiones, en tanto se trata de actos que no tienen la capacidad de dotar de eficacia a aquello que nació contrariando las normas de orden público, resaltando que no es dable alegar que la afiliada refrenda el traslado por no proveerse de información adicional, en tanto las administradoras de pensiones se hallan sujetas al estatuto financiero, imponiéndoles brindar a sus usuarios información completa y clara, obligación que no pueden trasladar a sus afiliados, pretendiendo que estos desconfíen de la información dada y busquen asesorías externas (artículo 97 del Decreto 663 de 1993¹).

Así las cosas, concluye esta colegiatura que la decisión de traslado entre regímenes no se fundamentó en una correcta información sobre las condiciones propias de la accionante, las derivaciones nocivas que implicaría y en general toda la información eficaz y oportuna relevante para el momento en que se generó la

¹ ARTICULO 97. INFORMACION.

1. Información a los usuarios. <Numeral modificado por el artículo 23 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas.

En tal sentido, no está sujeta a reserva la información correspondiente a los activos y al patrimonio de las entidades vigiladas, sin perjuicio del deber de sigilo que estas tienen sobre la información recibida de sus clientes y usuarios.

migración de régimen pensional. Irregularidades que llevan a esta corporación a establecer las consecuencias propias de un acto ineficaz.

Ahora bien, el A quo consideró que las consecuencias de la falta de información se subsanan bajo la pervivencia para la actora de las condiciones pensionales propias del RPM, estableciendo una serie de obligaciones y plazos para su cumplimiento, que consisten pagar la prestación por parte de la AFP Protección, la liquidación de un cálculo actuarial que determine el monto necesario para financiar una pensión en los términos de la Ley 797 de 2003, la necesidad para la AFP Protección de pagarlo en un plazo de 1 mes y la posibilidad de recobrar de la AFP Porvenir el 10%.

Empero para esta corporación tales consecuencias, además de ajenas a aquellas señaladas por la Sala de Casación Laboral de la CSJ en temas de ineficacia de traslado entre regímenes pensionales y aquellas pretendidas por la activa conforme al escrito de demanda y fijación del litigio, develan irregularidades en tanto el fallador de primera instancia asigna unas responsabilidades que rompen con la estructura del sistema pensional y cuantifica unas condenas en porcentajes que no se hallan sustentadas en ninguna norma.

Así las cosas, atendiendo el precedente jurisprudencial expuesto y en razón a la falta de información previa que ilustrara sobre las consecuencias del traslado entre regímenes, se declarará la ineficacia del traslado de la señora Inés Amparo Duque Rivera al RAIS, pero serán modificadas las órdenes consecuenciales, así:

Por efectos de la decisión aludida corresponde a la **AFP Protección SA** en un término no superior a 30 días desde la ejecutoria de esta providencia, retornar los recursos provenientes de la afiliación de la actora, que se componen de los montos depositados en las cuentas de ahorro individual con sus rendimientos, bonos pensionales si se hubieren generado, además de las cuotas de

administración, los porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, cuotas para el cubrimiento de los seguros previsionales, dineros que deberán estar indexados; descuentos que si bien en su momento tenían un fundamento legal, en el presente evento se quedan sin sustento en tanto el acto jurídico de traslado al RAIS no fue eficaz.

De igual forma, teniendo presente el RPM se conforma como un fondo común al cual se integran los recursos de todos los afiliados, donde no se destinan aportes al reaseguro de las contingencias de invalidez y muerte, es claro que todos los dineros inciden en el financiamiento del sistema y por ende de la prestación a que aspirará la actora. Por tanto corresponde a la **AFP Porvenir SA**, en un plazo no superior a 30 días desde la ejecutoria de esta sentencia a remitir a Colpensiones todos los recursos captados a la señora Duque Rivera, que incluye los gastos de administración, descuentos para el cubrimiento de seguros previsionales y porcentajes para el fondo de solidaridad pensional, dineros que fueron descontados de los aportes de la actora durante el tiempo en que permaneció afiliada a esta AFP y que serán trasladados a Colpensiones con la debida indexación, con cargo a los recursos propios de esta AFP (Porvenir)

Una vez sean trasladados los recursos por parte de las AFP del RAIS accionadas corresponde a Colpensiones recibir los dineros con el fin de que se vean reflejados en la historia laboral de la demandante como semanas de cotización imputadas a los periodos que fueron reportados en el RAIS y de acuerdo al IBC de aporte, las que habrán de tenerse como válidas para el reconocimiento de las prestaciones del sistema pensional a que haya lugar.

En síntesis, se declara la ineficacia de la afiliación al RAIS, con la consecuente devolución de la totalidad de los valores que Protección y Porvenir (esta a la vez como sucesora de la AFP Horizonte SA) recibieron con motivo de la afiliación de la demandante, más sus rendimientos e indexación, como ya se indicó.

Ahora en ***cuanto al reconocimiento de la pensión de vejez*** que dispuso el A quo, debe tenerse presente que el fallador de instancia, pese a tener amplias facultades de dirección del trámite y potestad de decisión extra y ultra petita, estas han de guardar equilibrio y respeto con el derecho al debido proceso y derecho de defensa, en tanto la sentencia habrá de responder a las súplicas, argumentos de defensa y aspectos demostrados en el trámite.

Es así que la Corte Constitucional tras advertir que las facultades extra y ultra petita comporta una atenuación del rigor del postulado de consonancia de la sentencia emitida por el juez del trabajo, en razón a los aspectos debatidos, esto es prerrogativas y beneficios mínimos con carácter irrenunciable, reseñó que tal poder no es absoluto en tanto se limita a los hechos debatido y probados dentro del proceso con la plenitud de las formas legales (al respecto la sentencia C 662 de 1998)

Premisas estas que llevadas al caso concreto develan que el fallador de instancia excedió los factores de competencia y emitió condenas que superaban los aspectos pedidos por la activa, determinados en la fijación del litigio y frente a los cuales se ejerció el derecho de defensa y actividad probatoria, en tanto el reconocimiento pensional nunca fue peticionado respecto a ninguna de las administradoras de pensiones accionadas, tampoco se adelantó la reclamación administrativa de que trata el artículo 6° del CPTSS, además que frente a este aspecto no hubo un debate, ora desde el plano fáctico, tampoco probatorio.

Así las cosas, será revocada la condena que respecto al reconocimiento pensional emitió el fallador de instancia, decisión que no comporta la negativa de tal prestación y por el contrario permite que frente a una eventual reclamación en este aspecto, quede abierta la posibilidad para que sus elementos y factores de configuración, tales como fecha de causación y disfrute, monto, entre otros, puedan ser pedidos administrativamente y cuestionados en esta misma vía y aun

a través de un proceso judicial con pleno apego a las reglas y garantías pertinentes.

Resta por indicar que se mantiene la condena en costas que efectuó la A quo, sin que se generen costas en esta instancia en tanto los argumentos de las recurrentes fueron acogidos parcialmente.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la declaratoria de ineficacia de traslado entre regímenes pensionales, pero **REVOCA** las restantes órdenes impuestas por el A quo, salvo la condena en costas.

En su lugar dispone que, por efectos de la ineficacia de traslado de la señora Inés Amparo Duque Rivera ha de entenderse que esta nunca migró del régimen de prima media y sus condiciones pensionales no han mutado.

Por efectos de la declaratoria de ineficacia las **AFP Protección en un término no superior a 30 días** desde la ejecutoria de esta providencia, retornar los recursos captados de la actora que se componen del capital y sus rendimientos, bonos pensionales si estos se hubieren generado, también retornará con la debida indexación las cuotas de administración, los porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, primas de seguros previsionales de invalidez y sobreviviente. Dineros que serán recibidos por Colpensiones y serán imputados a los periodos efectivamente cotizados.

De igual forma corresponde a la AFP Colfondos en el mismo término de 30 días desde la ejecutoria de esta decisión retornar a Colpensiones los recursos captados de la actora que correspondieron a gastos de administración, primas de

seguros previsionales de invalidez y sobreviviente. y contribuciones para el fondo de garantía de pensión mínima, estos con la debida indexación y con cargo a los recursos propios de esta AFP.

Corresponde a Colpensiones recibir los recursos que sean trasladados del RAIS los que se convalidarán como semanas efectivamente cotizadas en el RPM.

Se revoca de forma total la condena que por reconocimiento pensional emitió el A quo.

Costas en primera instancia como dispuso la A quo. sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por Edicto.

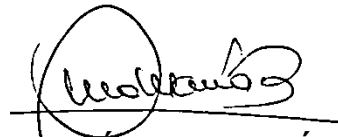
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001- 31- 05-003-2016-00098-01
Demandante: INÉS AMPARO DUQUE RIVERA
Demandado: COLPENSIONES, PORVENIR SA Y PROTECCIÓN SA
Decisión: CONFIRMA, MODIFICA Y REVOCA
Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 22 de agosto de 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO